

Examinada su solicitud de informe, remitida a este Gabinete Jurídico, referente al Proyecto de Real Decreto por el que se establece y regula el registro español de ayudas “de minimis” en el sector pesquero, solicitado de esta Agencia Española de Protección de Datos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 h) de la Ley Orgánica, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, y 5 b) del Estatuto de la Agencia, aprobado por Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, cúmpleme informarle lo siguiente:

I

El Proyecto sometido a informe tiene por objeto, tal y como dispone su artículo 1.1 la regulación y establecimiento del registro español de ayudas “de minimis” en el sector pesquero, en los términos que se desprenden del Reglamento (CE) núm. 875/2007 de la Comisión, relativo a la aplicación de los arts. 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas “de minimis” en el sector pesquero y modifica el Reglamento (CE) núm. 1860/2004, de 6 de octubre de 2004.

El Registro en el que se incluirán las ayudas otorgadas a las empresas del sector pesquero, dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos de pesca, contendrá conforme al artículo 3.1 los datos enumerados en el Anexo del Proyecto y tendrá carácter público e informativo, tal y como dispone el artículo 3.2.

Están obligados a comunicar la información susceptible de inscripción en el Registro todas las administraciones competentes para el otorgamiento de las ayudas reguladas por el mencionado Reglamento Comunitario, que compilarán y conservarán la información acreditativa del cumplimiento de las condiciones previstas en la mencionada norma, conforme prevé el artículo 4.1 del Proyecto, comunicando al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino toda la información que la Comisión Europea considere necesaria para determinar si se han cumplido las mencionadas condiciones.

El artículo 6 del Proyecto prevé igualmente que las Administraciones Públicas garantizarán la confidencialidad de los datos, los cuales sólo podrán ser utilizados para la finalidad concreta para la que han sido suministrados, de

conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

II

En el Anexo del Proyecto se recoge como información incluida en el Registro la referente a la autoridad concedente de la ayuda, el régimen y tipo de ayuda, el sector al que pertenece el destinatario, la norma que da cobertura a la correspondiente ayuda y los trámites del procedimiento de concesión de la misma, los “datos personales” del solicitante, correspondientes a su nombre y apellidos o razón social y número de identificación fiscal o CIF, la identificación de los buques del armador solicitante, el importe de la ayuda y su descripción.

Pues bien, a los efectos de analizar la incidencia de la normativa de protección de datos de carácter personal en el Proyecto sometido a informe, debe valorarse si el Registro creado por el mismo se encuentra sometido a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999.

En este sentido, debe recordarse que el Registro trae causa de lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) 875/2007, al que ya se ha hecho referencia, dado que el apartado 2 del citado precepto dispone que “el Estado miembro no podrá conceder la nueva ayuda *de minimis* hasta no haber comprobado que ello no incrementa el importe total de la ayuda *de minimis* recibida por la empresa en ese Estado miembro durante el período del ejercicio fiscal en curso y de los dos ejercicios fiscales anteriores por encima de cualquiera de los límites máximos establecidos en el artículo 3, apartados 2 y 4”.

A tal efecto, conforme al apartado 4 del artículo 4, “los Estados miembros registrarán y compilarán toda la información relativa a la aplicación del presente Reglamento. Tales registros deberán incluir toda la información necesaria para demostrar que se han cumplido las condiciones del presente Reglamento. Los registros relativos a las ayudas *de minimis* individuales deberán mantenerse durante diez ejercicios fiscales a partir de la fecha de concesión. Los registros relativos a los regímenes de ayudas *de minimis* deberán mantenerse durante un período de diez años a partir de la fecha en que se concediese en el marco del régimen la última ayuda individual. Previa solicitud por escrito, el Estado miembro de que se trate deberá facilitar a la Comisión, en un plazo de 20 días hábiles o en el plazo superior que se establezca en la solicitud, toda la información que la Comisión considere necesaria para determinar si se han cumplido las condiciones establecidas en

el presente Reglamento y, en particular, el importe total de la ayuda *de minimis* recibida por cualquier empresa y por el sector de la pesca del Estado miembro de que se trate”, añadiendo el artículo 4.3 que “en caso de que un Estado miembro haya establecido un registro central de las ayudas *de minimis* que contenga información completa sobre toda ayuda *de minimis* concedida por cualquier autoridad de dicho Estado miembro, el apartado 1 dejará de aplicarse a dicho Estado miembro desde el momento en que el registro abarque un período de tres ejercicios fiscales”.

En todo caso, conforme a lo dispuesto en el Reglamento y en el propio Proyecto sometido a informe, los beneficiarios de las ayudas cuyos datos serán incluidos en el Registro serán las “empresas del sector pesquero”, dedicadas, como ya se ha señalado a la producción, transformación o comercialización de productos pesqueros, siendo objeto de tratamiento, aparte de los datos relativos a la ayuda, únicamente los datos correspondientes a la identificación del solicitante, esto es, su nombre y apellidos o razón social y su CIF o NIF.

III

Pues bien, el artículo 2.2 del Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, aprobado por Real decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, dispone en su primer inciso que “este Reglamento no será aplicable a los tratamientos de datos referidos a personas jurídicas”. Del mismo modo, el apartado 3 del citado artículo 2 señala que “así mismo, los datos relativos a empresarios individuales, cuando hagan referencia a ellos en su calidad de comerciantes, industriales o navieros, también se entenderán excluidos del régimen de aplicación de la protección de datos de carácter personal”.

De lo dispuesto en el Proyecto se desprende que la totalidad de los datos contenidos en el Registro harán referencia a personas jurídicas o a personas físicas, pero exclusivamente en su condición de “empresas del sector pesquero”, incluyendo el Registro únicamente datos relacionados con la actividad empresarial de dichos empresarios individuales.

En consecuencia, cabe concluir que el Registro regulado por el Proyecto sometido a informe no se encuentra sometido a las normas de protección de datos de carácter personal, siendo recomendable reemplazar la expresión “datos personales”, contenida en el Anexo del Proyecto, por “datos identificativos y, sentadas estas premisas, suprimir la referencia a la Ley Orgánica 15/1999, prevista en su artículo 6, sin perjuicio de la permanencia del primer inciso de dicho precepto como garantía del adecuado funcionamiento de

las Administraciones Públicas participantes en el sistema, siendo así la redacción final del precepto la siguiente:

“Artículo 6. Confidencialidad de los datos

Las Administraciones Públicas garantizarán la confidencialidad de los datos, los cuales sólo podrán ser utilizados para la finalidad concreta para la que han sido suministrados.”